

Santiago, veintitrés de agosto de dos mil veinticuatro.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que doña Bárbara Alzerraca Salinas, abogada, por la Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua SpA (SASIPA), presentó recurso de queja contra los integrantes de la Corte de Apelaciones de Santiago, señores Hernán Crisosto Greisse y Mario Rojas González, quienes, por sentencia de once de marzo de dos mil veinticuatro, pronunciada en los autos Rol N°3.485-2023, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 362 y 402 del Código del Trabajo, rechazaron la reclamación judicial que dedujo contra la Resolución Exenta N°5, dictada en forma conjunta por los Ministerios de Economía, Defensa y Trabajo, de treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, que estableció el listado de empresas o corporaciones cuyos dependientes no pueden ejercer el derecho a huelga durante el bienio 2023-2025, del que la reclamante fue excluida.

La recurrente sostiene que la aludida resolución no incluyó a SASIPA en el listado de empresas estratégicas cuyos trabajadores no pueden ejercer el derecho a huelga por haber acordado servicios mínimos con el sindicato, lo que importa una distinción de la Administración que considera ilegal e inconstitucional, puesto que tratándose de aquellas que ofrecen servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, economía, seguridad nacional o al abastecimiento de la población, sus empleados no pueden ejercer tal prerrogativa, precisando que el ordenamiento no reglamenta casos de excepción vinculados a la situación descrita para sustentar la exclusión que impugna, ya que lo relevante, según lo disponen los artículos 362 y 402 del Código del Trabajo, es su giro o actividad económica, disposiciones de cuyo tenor desprende que tampoco está permitido efectuar ponderaciones adicionales, precisando que en Isla de Pascua es la única empresa que distribuye electricidad y agua, además de abastecer y suministrar bienes a la población que descarga en alta mar, prestaciones básicas que entiende insertas en el referido concepto, encontrándose, por tanto, en la hipótesis que suprime el ejercicio de la facultad reglada en el artículo 19 número 16 de la Constitución Política de la República, no obstante, tanto el pronunciamiento ministerial, como los jueces recurridos, cometieron el error que reprueba, constitutivo, en el caso de estos últimos, de grave falta o abuso; razones por las que solicita se dé lugar al recurso deducido, se deje sin efecto el fallo censurado y se acoja, en su lugar, la reclamación presentada contra la mencionada resolución exenta.

Segundo: Que, para resolver, la judicatura consideró que la huelga tiene reconocimiento constitucional, por lo que se debe amparar su ejercicio, de forma que toda limitación que la afecte configura una excepción que se debe interpretar y aplicar restrictivamente. Dentro de tales supuestos, se encuentra el artículo 359



del Código del ramo, que se refiere a los servicios mínimos y equipos de emergencia, en tanto que su artículo 362 excluye tal potestad de los trabajadores si se acoge la solicitud de calificación que reglamenta, disposición que entiende no ha sido infringida por la resolución exenta reclamada, que asimismo respetó el contenido de la Ley N°19.880, puesto que en tal dictamen se entregaron las motivaciones de hecho y de derecho correspondientes, fundada en los antecedentes, actuaciones y documentos que obran en el expediente, apegándose la autoridad al principio de legalidad y a la exigencia de motivación de los actos administrativos, y si bien la recurrente atiende servicios de utilidad pública, puede igualmente pactar con sus dependientes un listado de servicios mínimos con el fin de asegurar la continuidad de sus actividades, sin que la referida garantía se vea menoscabada, impidiendo su legítimo ejercicio durante la negociación colectiva, observando que en este caso, 35 trabajadores fueron concordados en dicha categoría de los 104 que se desempeñan en la empresa, en las áreas de operación directa, entrega de prestaciones básicas, atención de las necesidades de la población relacionadas con su vida, seguridad y salud, protección de las instalaciones y prevención de daños ambientales, a los que suma los no sindicalizados, por lo que el número resultante, en caso de paralización, es adecuado a los objetivos perseguidos al suscribir el referido acuerdo.

En su informe, los jueces recurridos indicaron que la correcta comprensión de las normas aplicables al caso permitió concluir que los argumentos esgrimidos por la reclamante no resultaban suficientes para dejar sin efecto la resolución impugnada, decisión que es corolario de un proceso de razonamiento e interpretación de las normas constitucionales y legales pertinentes, y de ponderación de los antecedentes agregados a los autos, estimando, por tanto, que no incurrieron en la falta o abuso grave que les atribuye la recurrente.

Tercero: Que el arbitrio interpuesto se contiene en el Título XVI del Código Orgánico de Tribunales que trata “De la jurisdicción disciplinaria y de la inspección y vigilancia de los servicios judiciales”, y está reglamentado en su párrafo primero que lleva el epígrafe de “Las facultades disciplinarias” y, sobre el particular, el inciso primero del artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales estatuye: *“El recurso de queja tiene por exclusiva finalidad corregir las faltas o abusos graves cometidos en la dictación de resoluciones de carácter jurisdiccional. Sólo procederá cuando la falta o abuso se cometa en sentencia interlocutoria que ponga fin al juicio o haga imposible su continuación o definitiva, y que no sean susceptibles de recurso alguno, ordinario o extraordinario, sin perjuicio de la atribución de la Corte Suprema para actuar de oficio en ejercicio de sus facultades*



disciplinarias. Se exceptúan las sentencias definitivas de primera o única instancia dictadas por árbitros arbitradores, en cuyo caso procederá el recurso de queja, además del recurso de casación en la forma”.

Cuarto: Que, en consecuencia, para dar lugar a tal arbitrio, es menester que el tribunal dicte una resolución cometiendo falta o abuso grave, esto es, de mucha entidad o importancia, único contexto que, *prima facie*, autoriza la aplicación de una sanción disciplinaria a los recurridos de ser acogido.

Según la doctrina, de esta forma “...se recoge el interés del Ejecutivo y de la Suprema de limitar su procedencia (sólo para abusos o faltas graves), poniendo fin a la utilización del recurso de queja para combatir el simple error judicial y las diferencias de criterio jurídico...” (Barahona Avendaño, José Miguel, “El Recurso de Queja. Una Interpretación Funcional”, 1998, p. 40).

En este sentido, es importante considerar que el concepto que introduce el artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales, en orden a que el recurso de queja tiene por exclusiva finalidad corregir “faltas o abusos graves” cometidos en la dictación de resoluciones de carácter jurisdiccional, está íntimamente relacionado con el principio elaborado por la doctrina procesal de la “trascendencia”, que, en el caso concreto, dice relación con la necesidad de que la falta o abuso tenga una influencia sustancial en la parte dispositiva de la sentencia.

Quinto: Que esta Corte ha ido precisando por la vía jurisprudencial los casos en que se está en presencia de una falta o abuso grave, sosteniendo que se configura, entre otros, cuando se incurre en una falsa apreciación del mérito del proceso, circunstancia que se presenta cuando se dicta una resolución judicial de manera arbitraria, por valorarse de forma errónea los antecedentes recabados en las etapas procesales respectivas (Mario Mosquera Ruiz y Cristián Maturana Miquel, “Los recursos procesales”, año 2010, p. 387).

Se trata, por tanto, de un recurso extraordinario que procede en los casos descritos, que persigue modificar, enmendar o invalidar un fallo o resoluciones pronunciadas con falta o abuso, destinado a corregir la arbitrariedad judicial, mediante la imposición de medidas disciplinarias a los recurridos ante la existencia de un perjuicio que afecte al recurrente, manifestado en un error grave y notorio de hecho o de derecho (Alejandro Romero Seguel, en “Curso de Derecho Procesal Civil”, t. V, año 2021, p. 342).

Sexto: Que, del examen de los antecedentes obtenidos del sistema computacional, se obtienen las siguientes conclusiones:

1.- SASIPA es una sociedad por acciones de propiedad de la Corporación de Fomento de la Producción que orgánicamente se encuentra inserta en el



Sistema de Empresas Públicas en cuanto a su administración, gestión, lineamientos generales y gobierno corporativo. Su objeto es la prestación de servicios en Isla de Pascua en las áreas de generación y distribución eléctrica; producción y distribución de agua potable por redes, y de agua cruda por camiones aljibes; y carga y descarga marítima de insumos, empleando para tal efecto dos barcas de su propiedad.

2.- La empresa cuenta con 104 trabajadores de dotación propia, y 32 eventuales contratados exclusivamente para faenas de carga y descarga.

3.- Del total de dependientes, 86 pertenecen al sindicato, entidad que pactó servicios mínimos con SASIPA el 15 de abril de 2020, ya que para el bienio 2019-2020 no solicitó su calificación como empresa estratégica, incluyendo en dicha categoría a 35 trabajadores distribuidos de la siguiente forma: 15 en las áreas de generación y distribución eléctrica; 8 en las de producción y distribución de agua potable; y 12 en las de carga y descarga marítima.

4.- La resolución impugnada excluyó a la reclamante del listado de empresas cuyos trabajadores no pueden ejercer el derecho a huelga, por contar con calificación de servicios mínimos vigente, por lo que no se encuentra en la hipótesis reglada en el artículo 362 inciso primero del Código del Trabajo.

Séptimo: Que, de lo expuesto, se advierte que la recurrente reprueba el ejercicio de ponderación de los derechos concurrentes, labor que estima improcedente según el tenor de la normativa aplicable, y el examen de proporcionalidad vinculado a la afectación del derecho a huelga, puesto que afirma que la circunstancia de encontrarse frente al supuesto normado en el artículo 362 del Código del ramo y por tratarse de una empresa que presta servicios de utilidad pública, de acuerdo a la legislación sectorial, constituyen razones suficientes para acceder a su inclusión en el listado respectivo, impidiendo el ejercicio de esa garantía a los trabajadores sindicalizados.

Octavo: Que, sin embargo, el caso propuesto no sólo se vincula con la determinación del correcto sentido de la legislación pertinente, porque se inserta en un ámbito de interpretación de normas de carácter constitucional consistente, en particular, en discernir los alcances del derecho a huelga en la hipótesis planteada, ya que la alegación de la recurrente importa la exclusión de esta garantía fundamental durante la negociación colectiva, por lo que configura un error circunscribir el análisis únicamente al tenor de tales normas.

En tal sentido, “la doctrina y jurisprudencia moderna entienden que su interpretación está sujeta a reglas especiales, diversa a las reglas tradicionales (Savigny). Esta especialidad nace de que la Constitución es un sistema de normas pleno (...) Por ende, todo texto constitucional tiene una forma política dominante



que da cuenta de cierta fórmula política importante para la hermenéutica, lo que significa que la hermenéutica constitucional está fuertemente vinculada a valoraciones que la Constitución hace suyas. Por tal motivo es que se postula como las reglas de hermenéutica prevalentes la regla sistemática y la regla finalista, es decir, un método finalista sistémico. Solo complementariamente en el campo de la interpretación constitucional de las reglas de Savigny (gramaticales, lógicas e históricas. Lo anterior tiene dos significados: (i) La hermenéutica es sistémica, por lo que la Constitución debe ser leída como un sistema de normas coherentes, de tal manera que las decisiones que se tomen guarden armonía con la totalidad de las normas, prefiriéndose así los productos hermenéuticos que son armonizables con el sistema. Y, (ii) La hermenéutica constitucional es finalista, en el sentido de que debe tener presente el techo ideológico de la Constitución al momento de adoptar decisiones fundamentales”. (Francisco Zúñiga Urbina, “Lecciones de Derecho Constitucional” t. I, pp. 262 y 263).

En forma complementaria Guastini, para quien “los conflictos entre principios constitucionales no pueden resolverse utilizando criterios de solución estándar de los conflictos, señala que no se puede utilizar el criterio *lex posterior* porque los dos principios son contemporáneos. No se puede utilizar el criterio *lex superior* porque los dos principios tienen la misma posición en la jerarquía de las fuentes. No se puede utilizar el criterio *lex specialis* porque las dos clases de hechos regulados por los principios se entrecruzan” (Riccardo Guastini, “Interpretación, Estado y Constitución”, p. 229).

Noveno: Que, además, se debe tener presente que la Constitución asegura que el ejercicio de los derechos que reconoce no puede verse afectado en su esencia, entregando a la legislación su reglamentación que puede tolerar aquel supuesto de exclusión, en el caso concreto, impedir la huelga, no obstante lo cual, tratándose de principios y normas de textura abierta, la determinación de sus márgenes de aplicación, por su carácter difuso, configura una labor no exenta de dificultad, por lo que, para concluir el propósito prohibitivo pretendido, como se precisó, se debe acudir en forma previa a reglas de interpretación particulares para obtener un resultado óptimo que excluya como resultado el desconocimiento de la garantía fundamental contenida en su artículo 19 número 16, limitándose el análisis sólo al tenor del artículo 362 del Código del Trabajo, por cuanto su contenido se subordina al de tal superior precepto que, asimismo, configura una hipótesis que por su carácter excepcional necesariamente es de aplicación restrictiva.

Se ha dicho, a tal efecto, que “esto significa que la naturaleza jurídica de los derechos -su ‘esencia’- es anterior al momento legislativo, y que el legislador debe



respetar el núcleo o propiedades básicas de los mismos. En ese sentido, esta garantía también constituye un límite, pero para el legislador si se traspasa dicho límite, dicho traspaso deviene en inconstitucional. Y sería, además, el límite de límites, en tanto ‘limita la posibilidad de limitar, porque señala un límite más allá del cual no es posible la actividad limitadora de los derechos fundamentales y de las libertades públicas’ (Francisco Zúñiga U., “Lecciones de Derecho Constitucional”, t. II, p. 204).

De lo anterior se desprende que en los casos y en la oportunidad que resulta procedente, la huelga constituye la regla de general aplicación, por lo que su prohibición resultará admisible sólo si concurren los requisitos previstos en la norma constitucional que la consagra y en la legal que la sistematiza, desestimándose la extensión de sus supuestos por analogía o acudiendo a un método hermenéutico que implique su aplicación excesiva, imposibilitando finalmente su ejercicio.

Décimo: Que, vinculado con lo ya señalado, uno de los principios útiles a la labor de interpretación de las normas constitucionales, es el de razonabilidad o proporcionalidad, que “constituye un parámetro de control cada vez que con objeto de optimizar un bien colectivo, el legislador limita o restringe un derecho fundamental”, que, “en sentido estricto examina si la limitación o restricción producida al derecho constituye una medida equilibrada y justa entre el beneficio para el bien común que se obtiene de la limitación y el perjuicio que sufre el derecho afectado. Se trata de un análisis ponderativo, se ponen en la balanza las ventajas e inconvenientes que se producirían para aquellos afectados en el ejercicio de sus derechos fundamentales y para el bien público. Cuanto más grave o pesada sea la intervención a los derechos fundamentales de las personas afectadas, debe existir una más intensa afectación del interés público que la justifique, se valora la medida en sí misma a la luz del derecho o los derechos fundamentales afectados y el interés público perseguido (...) Esta dimensión del principio de proporcionalidad implica un juicio ponderativo, vale decir, un medio o método a través del cual se realiza en cada caso concreto, teniendo, por tanto, una aplicación casuística” (Humberto Nogueira Alcalá, “Derechos Fundamentales y Garantías Constitucionales”, pp. 289, 292 y 293).

Undécimo: Que, en consecuencia, la limitación a un derecho constitucional debe responder a un criterio de racionalidad, proporcionalidad o prohibición de exceso, de modo que valorando las condiciones concurrentes del caso concreto y sus particularidades, no se obtenga como resultado práctico su prohibición exorbitante o ejercicio limitado en un grado tal que imposibilite su realización material, por lo que no se trata de un análisis restringido sólo al examen nominal



de los supuestos reglados en la legislación, como parece sostener la empresa recurrente, sino calificado o especial en un ámbito diferenciado por concurrir en el examen propuesto determinadas garantías fundamentales que distinguen la actividad encomendada al intérprete, configurando antecedentes que se deben reconocer al momento de definir su resultado vinculado al establecimiento del alcance de la limitación legal a tales prerrogativas.

Duodécimo: Que, de lo expuesto, se advierte que el reproche que efectúa la recurrente al dictamen ministerial y a la resolución impugnada no concurre, ya que para discernir la prevalencia del derecho a huelga tratándose de una empresa que presta determinados servicios de utilidad a la población, la judicatura debía recurrir necesariamente a los criterios de interpretación señalados para decidir, relacionados con la racionalidad o proporcionalidad de la restricción planteada en el caso concreto, ponderando su vigencia o prohibición, para lo cual tuvo en especial consideración que el interés reclamado por SASIPA vinculado a la protección de la población se encontraba debidamente resguardado a través de los servicios mínimos pactados, el número de trabajadores concordados (35) y los no sindicalizados (18), sumado a aquellos destinados exclusivamente a labores de carga y descarga (32), análisis que refleja el ejercicio de la labor hermenéutica descrito, razón que permite desestimar la falta imputada.

Decimotercero: Que, en consecuencia, el criterio adoptado en el dictamen que se revisa, vinculado a la existencia de servicios mínimos garantizados como factor relevante para asumir la postura censurada, es consistente con el análisis efectuado, puesto que configura un antecedente distintivo que se encuentra presente en el caso que se examina y útil al momento de discernir el nivel de afectación del derecho a huelga de los trabajadores, que en la forma descrita, ya presenta un grado de menoscabo, sino también acorde con la mantención de los servicios básicos que entrega SASIPA, que en el número ya precisado se destinarán a las labores pactadas según la valoración efectuada en su oportunidad, entre las que se encuentran aquellas que sostienen el reproche, por lo que no se advierte que tal fundamento configure el supuesto de procedencia de la queja deducida.

Decimocuarto: Que, de igual forma, la sola consideración del giro de la impugnante para colegir la afectación a la norma que regla la hipótesis que limita el derecho a huelga, se restringe al contenido del artículo 362 del Código del Trabajo, obviando la exigencia de adecuación interpretativa expuesta, que demanda la concurrencia de criterios de un peso normativo superior a aquella sola invocación, actividad comercial que, como se explicó, se encuentra garantizada en cuanto a su desarrollo y beneficio a los usuarios que dependen de su ejercicio, por



lo que no se trata de un aspecto obviado, sino ponderado en relación al grado de afectación al derecho de los trabajadores no concordados de declararse en huelga en la oportunidad correspondiente.

Decimoquinto: Que similar conclusión se puede obtener al analizar la alegación que formula la recurrente en cuanto a tratarse de la única prestadora de los servicios de electricidad, agua y abastecimiento de Isla de Pascua, ya que anteriormente consideró suficiente el número de aquellos dependientes para otorgar estas prestaciones durante el período que precedió al actual, sin que justificara en qué grado tal grupo esta vez sería insuficiente para atenderlas, puesto que no se advierte racionalmente en qué medida dejarían de atender la misma finalidad prevista en aquel momento, de lo que se desprende que la empresa se encontraría en una posición similar y por tanto suficiente para enfrentar la carencia de mano de obra en caso de huelga.

Decimosexto: Que, de lo expuesto, se desprende que la materia tratada concierne a un asunto de interpretación de las normas concurrentes, en especial de aquellas de naturaleza constitucional y la garantía de los trabajadores a declararse en huelga como herramienta legítima inserta en el procedimiento de negociación colectiva, advirtiéndose, por tanto, que el mérito de los antecedentes no permite concluir que los jueces recurridos -al decidir como lo hicieron- incurrieran en alguna de las conductas que la ley reprueba, susceptible de enmienda a través del ejercicio de las atribuciones disciplinarias de esta Corte.

Decimoséptimo: Que, al respecto, cabe señalar que el proceso de interpretación de la ley que lleva a cabo la judicatura en cumplimiento de su cometido no puede revisarse por la vía del recurso de queja porque constituye una labor fundamental, propia y privativa de dicha función, a menos que sea caprichosa o arbitraria, defecto que no se advierte en el presente caso según se analizó, razón por la que el arbitrio intentado será desestimado.

Decimooctavo: Que, finalmente y sobre la misma materia, esta Corte ha emitido pronunciamientos previos rechazando los recursos de queja deducidos en los autos Rol N°33.590-2018, 33.592-2018, 2.246-2019, 7.077-2019, 27.414-2020 y 104.341-2020, y, más recientemente, en los ingresos N°15.513-2024 y 15.514-2024.

Y en conformidad, además, a lo dispuesto en los artículos 548 y 549 del Código Orgánico de Tribunales, **se rechaza el recurso de queja** interpuesto por doña Bárbara Alzerraca Salinas.

Acordada con el **voto en contra** de los ministros señores Simpértigue y Muñoz Pardo, para quienes los jueces recurridos incurrieron en grave falta o abuso, por cuanto debían tener en especial consideración para decidir que la reclamante es



de aquellas empresas que atienden servicios de utilidad pública, concurriendo el supuesto básico de procedencia contenido en el artículo 362 del Código del Trabajo, del que no se desprende como criterio interpretativo que con anterioridad concordara servicios mínimos, resultando únicamente relevante para discernir la controversia planteada la afectación que la paralización de las prestaciones que otorga provoca a la salud, economía o al abastecimiento de la población, según la calificación que efectúa la legislación aplicable, en especial la de servicios eléctricos y sanitarios, incurriendo igualmente la resolución ministerial atacada en idéntico error, lo que hacía necesario su modificación, incluyendo a SASIPA en el listado respectivo.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Nº11.064-2024.-

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señora Andrea Muñoz S., señor Diego Simpertigue L., ministro suplente señor Juan Manuel Muñoz P., y las Abogadas Integrantes señoras Leonor Etcheberry C., y Fabiola Lathrop G. No firma el ministro suplente señor Muñoz Pardo, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por haber terminado su periodo de suplencia. Santiago, veintitrés de agosto de dos mil veinticuatro.



En Santiago, a veintitrés de agosto de dos mil veinticuatro, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

